

REPÚBLICA DE COLOMBIA – RAMA JUDICIAL



**JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE CALI**

Auto Interlocutorio No. 360

Santiago de Cali, seis (6) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN : 76001-3333-001-2021-00159-00
CONVOCANTE : LUZ HELENA RAMIREZ GOMEZ
CONVOCADO : CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL- CASUR
ASUNTO : CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

I. ASUNTO A DECIDIR

Procede el Juzgado a pronunciarse sobre la conciliación extrajudicial surtida entre la señora LUZ HELENA RAMIREZ GOMEZ y la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL- CASUR, aprobada por la Procuraduría 18 Judicial II para Asuntos Administrativos, tal como consta en el acta de audiencia de conciliación de fecha 26 de julio de 2021.

El presente acuerdo conciliatorio se soporta en los siguientes

II. HECHOS

2.1. Se expone que al señor Erasmo Amaya Escalante le fue reconocida la asignación mensual de retiro el 29 de julio de 1993, a su muerte Casur le reconoció a la convocante la sustitución de la asignación, en calidad de cónyuge supérstite, mediante la Resolución No. 5375 del 3 de julio de 2014.

2.2. Para los años 1999 a 2004 la asignación de retiro de la convocante fue reajustada por debajo del índice de Precios al Consumidor.

2.3. En el mes de abril de 2021, elevó petición a la entidad convocada solicitando el reajuste y pago indexado de su asignación conforme al IPC.

2.4. La entidad convocada no atendió de manera favorable la solicitud, a través del oficio No. 20211200-010064791 ID 652178 del 30 de abril de 2021.

III. PRETENSIONES

Solicita la reliquidación y el reajuste la asignación de retiro devengada, a partir del 1 de enero de 1999, aplicando el IPC certificado por el DANE, con fundamento en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 238 de 1995.

De la misma manera, pide que se paguen las diferencias resultantes debidamente indexadas.

IV. DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

La audiencia de conciliación fue celebrada por la Procuraduría 18 Judicial II para asuntos administrativos, el día 26 de julio de 2021, en la que la parte convocada manifestó:

“Mediante el presente escrito en forma respetuosa en mi calidad de apoderada de la entidad convocada, en cumplimiento con lo preceptuado por el Señor Procurador General de la Nación en la Resolución 0127 del 16 de marzo de 2020, y teniendo en cuenta dentro del proceso de la referencia: 1. Que en cuanto tiene que ver con las pretensiones del convocante, la entidad demandada y su Comité Técnico de Conciliación y Defensa Judicial definió su Política Institucional para la Prevención del Daño Antijurídico en sesión realizada el pasado 07 de enero de 2021 y plasmada en el acta número 2, a fin de que este tipo de controversias se dirima mediante el mecanismo de solución de conflictos previsto por la Ley y definido como La Conciliación Judicial y/o Extrajudicial. 2. Que en el caso que nos ocupa a la entidad SI le asiste ánimo conciliatorio, razón por la cual anexo la propuesta de liquidación en atenta solicitud de que su señoría le corra traslado al convocante para que exprese su posición frente a la misma. 3. A la señora LUZ HELENA RAMIREZ GOMEZ en su calidad de sustituta de la asignación de retiro que devengaba el Agente ERASMO AMAYA ESCALANTE (q.e.p.d.) en su calidad de retirado de la Policía Nacional, la entidad está dispuesta a conciliar, reconocer y pagar lo concerniente el reajuste de la asignación de retiro, teniendo en cuenta los incrementos ordenados por la Ley en cuando a la aplicabilidad del índice de precios al consumidor – IPC. 4. Se pagará la diferencia resultante de la aplicación del porcentaje decretado por el gobierno nacional o del índice de precios al consumidor cuando este último haya sido superior, reconocido desde la fecha de la prescripción a la fecha de la audiencia de conciliación, es decir, a partir del 05 de abril de 2017 hasta el día 26 de julio de 2021. La prescripción correspondiente será la contemplada en las normas prestacionales según el régimen aplicable. 5. Se conciliará el 100% del capital y el 75% de la indexación. 6. El pago se realizará de la siguiente manera: Valor del 100% del capital: \$ 5.395.501 Valor del 75% de la indexación: \$ 269.074. Menos los descuentos de ley correspondientes a los aportes a Casur de \$ 208.920 pesos y los aportes a Sanidad de \$ 196.207 pesos que todo afiliado o beneficiario debe hacer. Para un VALOR TOTAL A PAGAR de cinco millones doscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos M/Cte. (\$5.259.448,00), incrementándose la asignación en \$ 94.092,00. 7. Una vez aprobada la Conciliación por el Despacho Judicial y radicada en la entidad acompañada de los documentos legales pertinentes por parte del convocante, se cancelará dentro de los seis meses siguientes sin reconocimiento de intereses, ni costas, ni agencias. Igualmente, la entidad en aplicación del artículo 93 de la Ley 1437, revocará los actos administrativos mediante los cuales negó el reajuste de su asignación de retiro al convocante”

En cuanto a esta fórmula conciliatoria, el apoderado de la parte convocante manifestó:

“La doctora CLAUDIA LORENA CABALLERO SOTO, correo (sic) trasladó el día viernes de la propuesta de conciliación, lo que permitió hacer un análisis la propuesta siendo esta correcta; por lo tanto acepto la propuesta que hace CASUR”.

A su turno el Agente del Ministerio Público que conoció del asunto manifestó estar de acuerdo con la fórmula de arreglo a la que llegaron las partes en los siguientes términos:

“(…) considera el Despacho que el anterior, contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento¹ y reúne los siguientes requisitos: (i) el eventual medio de control que se ha podido llegar a presentar no ha caducado (art. 61, Ley 23 de 1991, modificado por el art. 81, Ley 446 de 1998); (ii) el acuerdo conciliatorio versa sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial disponibles por las partes (art. 59, Ley 23 de 1991, y 70, Ley 446 de 1998); (iii) las partes se encuentran debidamente representadas y sus representantes tienen capacidad para conciliar; (iv) obran en el expediente digital las pruebas necesarias que

justifican el acuerdo, a saber: Caratula de conciliación, convocatoria para audiencia de conciliación prejudicial, poder legalmente conferido por el convocante para su representación, oficio casur No. 652178 del 21/04/30, resolución No. 5375 del 3 julio de 2014 por el cual reconoce y niega sustitución de asignación mensual de retiro, desprendible de pago, poder de la apoderada de la entidad CASUR con sus respectivos anexos, acta de comité de conciliación No. 02 del 7 de enero de 2021, propuesta de conciliación por parte de la apoderada judicial de la entidad CASUR y liquidación de indexación de partidas computables nivel ejecutivo que se debe cancelar (v) en criterio de esta agencia del Ministerio Público, el acuerdo contenido en el acta no es violatorio de la Ley y no resulta lesivo para el patrimonio público (art. 65 A, Ley 23 de 1.991 y art. 73, Ley 446 de 1998)”.

Conforme a anterior, procede el Juzgado a pronunciarse sobre la conciliación extrajudicial antes citada, previas las siguientes

V. CONSIDERACIONES:

Corresponde a este Despacho efectuar un análisis sobre el caso en concreto, para determinar el cumplimiento de los requisitos legales y así decidir si el acuerdo se aprueba o se imprueba.

Debe tenerse en cuenta que la finalidad de la conciliación es la de solucionar eventuales litigios y el que aquí se evitaría tiene que ver según el acta de conciliación, con la interposición de un MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (artículo 138 del CPACA).

La conciliación en el derecho administrativo es un importante mecanismo para la composición de los litigios que pueden suscitarse a través de los medios de control consagrados en los artículos 138, 140, y 141 del CPACA y en ese orden coadyuva a la descongestión de los despachos judiciales con el fin de asegurar un eficaz acceso a la Administración de Justicia, tal y como lo ordenan el Preámbulo y los artículos 2 y 229 de la Constitución Política. Esta consideración debe ser consecuente con la debida utilización que se pueda hacer de ésta, por ello mismo, exige previa homologación judicial.

Antes de entrar a determinar si la conciliación reúne los requisitos establecidos en la ley, es necesario destacar que en cuanto al tema objeto de controversia el H. Consejo de Estado ya ha tenido oportunidad de pronunciarse señalando tajantemente que en aplicación de la Ley 238 de 1995, deben reajustarse las pensiones de la Fuerza Pública con base en el IPC (Ley 100 de 1993), precedente jurisprudencial que acoge en su integridad este despacho para resolver la presente litis, esto dijo dicha Corporación¹:

“(…) En tales circunstancias, como ya quedó visto el ajuste de pensiones y asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza Pública debe hacerse conforme al índice de precios al consumidor I.P.C., de que trata el Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, en sus artículos 14 y 142, por remisión expresa que hiciera el propio legislador en la Ley 238 de 1995.

Bajo estos supuestos, y teniendo en cuenta que la Sala Plena de Sección ya había establecido en sentencia de 17 de mayo de 2007. Rad. 8464-2005. M.P. Jaime Moreno

¹ CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN “B”. Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE. Bogotá, D.C., quince (15) de noviembre de 2012. Radicación número 25000-23-25-000-2010-00511-01(0907-11). Actor: CAMPO ELIAS AHUMADA CONTRERAS. Demandado: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES.

García que en el caso de los oficiales de la Fuerza Pública les resulta más favorable el reajuste de su asignación de retiro, con aplicación del índice de precios al consumidor I.P.C., respecto de los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, tesis que de manera consistente y uniforme se ha venido reiterando la Sala, para el caso concreto, dará por probado ese hecho y, en consecuencia, ordenará el ajuste de las asignaciones de retiro que el actor viene percibiendo, con fundamento en el índice de precios al consumidor, I.P.C., respecto del citado período, sin perjuicio del término prescriptivo.(...)

Con fundamento en la providencia anterior, la cual el Despacho la acoge en su integridad, se pasa a establecer si la conciliación reúne los requisitos de ley para su aprobación.

VI. PRESUPUESTOS PARA LA APROBACIÓN DEL ACUERDO CONCILIATORIO

✓ Que no haya operado el fenómeno de la caducidad.

En los términos de literal c) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA, al tratarse el presente asunto de prestaciones periódicas donde se solicita la nulidad de un acto que niega un reajuste pensional, la demanda no está sometida a término de caducidad y podía ser presentada en cualquier tiempo.

✓ Las personas que concilian estén debidamente representadas;

Efectivamente, las partes acudieron debidamente representadas a la audiencia de conciliación, advirtiéndose:

- Que en el archivo digital No. 2 obra poder debidamente conferido a profesional del derecho por la convocante Luz Helena Ramírez Gómez para la presentación de la solicitud de audiencia de conciliación extrajudicial, con la facultad expresa para conciliar.
- En el archivo digital No. 9, figura poder otorgado a abogada, para obrar en representación de la entidad convocada, en el cual se advierte que tiene la facultad para conciliar.

Se encuentra por tanto cumplido el requisito de debida representación de las partes en el presente trámite.

✓ Que lo reconocido patrimonialmente, esté debidamente respaldado o probado en la actuación;

- A la señora Luz Helena Ramírez Gómez, en calidad de compañera permanente del señor Erasmo Amaya Escalante, se le reconoció sustitución de la asignación de retiro, mediante la Resolución No. 5375 del 3 de julio de 2014, proferida por el Director General de Casur, efectiva a partir del 1 de octubre de 2013. (Archivo No. 3).
- La convocante el día 5 de abril de 2021², elevó petición ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, solicitando la reliquidación de la asignación de retiro conforme al IPC. (Archivo No. 7).

² Según se desprende de la respuesta a la petición elevada por la convocante, archivo digital No. 3

- La entidad convocada dio respuesta de manera desfavorable mediante el oficio No. 2021 1200-010064791 Id: 652178 del 30 de abril de 2021. (Archivo No. 3).

- Se allega copia de acta No. 02 del 7 de enero de 2021 del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad convocada y la respectiva liquidación de la asignación de retiro de acuerdo a la suma pagada y el valor que corresponde con los incrementos del IPC a cancelar a la parte convocante. (Archivos No. 15 y 16).

Como bien se advierte lo solicitado por la parte convocante fue aprobado por el Comité de Conciliación de la entidad convocada, y obra toda la prueba documental que da cuenta del vínculo legal entre la parte convocante y convocada quedando soportado así el acuerdo conciliatorio.

Por lo expuesto, se encuentra por tanto debidamente respaldada la obligación a cargo de la convocada.

✓ **No resulte violatorio de la ley y lesivo para el patrimonio público.**

Se advierte que al estar debidamente soportados cada uno de los hechos expuestos en la solicitud de conciliación y reiterado por la parte convocada, se cumple cabalmente con el requisito dispuesto para la aprobación de la conciliación objeto de estudio.

En primer lugar, si bien, el acuerdo recae sobre el reajuste de una asignación de retiro que tiene la categoría de derecho irrenunciable, resulta igualmente cierto que la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha establecido que resulta jurídicamente viable llegar a una conciliación frente al monto de la prestación siempre y cuando se busque satisfacer el derecho objeto de la reclamación.

En providencia del 14 de Junio de 2012³, se estableció lo siguiente frente a la posibilidad de llegar acuerdos conciliatorios frente a derechos de naturaleza laboral:

“(...) la audiencia de conciliación puede versar sobre derechos laborales, sólo que en este caso el alcance del acuerdo conciliatorio es limitado, pues el conciliador debe velar que no se menoscaben los derechos fundamentales.

La jurisprudencia constitucional ha precisado que dicha limitación se refiere a que los derechos fundamentales no son objeto de transacción o desistimiento. En consecuencia, en principio no sería procedente recurrir a la conciliación⁴, “Sin embargo, también ha establecido la Corte que la convocatoria que hace el juez de tutela a la audiencia de conciliación y la práctica de esta etapa procesal no son en sí mismas ilegales y por lo tanto no vician el trámite de la acción. Se hace necesario distinguir entre la conciliación como etapa procesal y el acuerdo conciliatorio.”⁵

Así las cosas, siendo legal en sí misma la audiencia de conciliación como etapa procesal, se debe reiterar que: “Esta apreciación debe entenderse en el sentido de que

³ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE Bogotá D.C., catorce (14) de junio de dos mil doce (2012) Radicación número: 25000-23-25-000-2008-01016-01(1037-11)

⁴ T-374 de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz, citada por la T-232 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

⁵ T-677 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

no puede transigirse menoscabando los derechos fundamentales. Pero, cosa diferente es que se llegare **a un acuerdo que precisamente conlleve la protección del derecho fundamental**⁶. Así en cada caso se debe analizar si la conciliación conllevó realmente a “allanamiento del ente accionado a los hechos presentados por el accionante que dio como resultado un acuerdo sobre las alternativas técnicas para superar la violación del derecho.”⁷. (Subrayado fuera de texto).

Por tanto se insiste en que si como resultado de la audiencia de conciliación, se protege el derecho reclamado en el proceso en razón de la fórmula de arreglo, que es aceptada por las partes y avalada por el conciliador, quien vela porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, dicho acuerdo debe tenerse como válido⁸.

(...)

...De modo que el juez sí puede válidamente convocar a las partes a una audiencia de conciliación aun cuando el derecho en discusión tenga el carácter de irrenunciable, o sea cierto e indiscutible cuando precisamente en esa audiencia se satisface y reconoce el derecho reclamado. En ese evento “Si las partes llegan a un acuerdo el juez lo aprobará, si lo encuentra conforme a la ley”, tal como lo ordena el inciso segundo del artículo 43 de la Ley 640 de 2001.” (Resaltado por el Despacho).

Conforme a los parámetros jurisprudenciales transcritos, se tiene que en el presente asunto el acuerdo conciliatorio efectuado por las partes es procedente, toda vez que no se menoscaban los derechos ciertos e indiscutibles consagrados en el sistema de seguridad social de la Fuerza Pública que benefician al convocante.

En efecto, la liquidación realizada a favor de la señora Luz Helena Ramírez Gómez, por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía - Casur garantiza un incremento de la asignación de retiro y se ajusta a las pretensiones de la reclamación efectuada por ésta en sede administrativa.

Adicionalmente, la fórmula de arreglo presentada por CASUR asegura el pago del capital adeudado en un 100% en el equivalente a \$5.395.501, el reconocimiento por valor indexado del 75%, equivalente a la suma de \$269.074 menos los descuentos de ley, para un total a pagar de cinco millones doscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos M/Cte. (\$5.259.448), reconociéndose su pago a partir del 5 de abril de 2017, por prescripción.

En segundo lugar, se reitera, que se cuenta con precedente jurisprudencial aplicable, en el cual nuestra Alta Corporación se ha pronunciado de manera reiterada que es procedente el reajuste de la asignación de retiro del personal de la Fuerza Pública con base en el IPC (Ley 100 de 1993), para los años 1997 a 2004, en aplicación de la Ley 238 de 1995.

En este contexto, se evidencia que en el presente caso el acuerdo conciliatorio realizado por las partes no resulta violatorio de la ley toda vez que se ajusta a los lineamientos jurisprudenciales citados y recae sobre los efectos patrimoniales y económicos derivados de un acto administrativo que son susceptibles de conciliación y adicionalmente no es lesivo para el patrimonio público teniendo en

⁶ T-232 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero

⁷ T-677 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

⁸ T-677 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

cuenta que permite a la entidad pública el pago de una suma de dinero menor a la que tendría que reconocer luego del trámite de un proceso judicial.

Una vez corroborado que el acuerdo conciliatorio determinado por las partes en la suma de cinco millones doscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos M/Cte. (\$5.259.448,) satisface todos los requisitos exigidos legalmente se procederá a su aprobación.

En consecuencia, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali,

R E S U E L V E

PRIMERO: APROBAR la Conciliación Extrajudicial llevada a cabo ante el Procurador 18 Judicial II para Asuntos Administrativos, entre la señora LUZ HELENA RAMIREZ GOMEZ y la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL- CASUR, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: El cumplimiento del acuerdo conciliatorio se llevará a cabo dentro de los seis (6) meses siguientes a la radicación en la entidad del auto aprobatorio de la conciliación acompañada de los demás documentos, en los términos y condiciones establecidas en el acta de audiencia de 26 de julio de 2021 suscrita por el Procurador 18 Judicial II para Asuntos Administrativos.

Igualmente, CASUR en aplicación del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, revocará el acto administrativo mediante el cual negó el reajuste de su asignación de retiro al convocante.

TERCERO: Conforme a lo consagrado en el artículo 24 del Decreto 806 de 2020, no se expedirán copias auténticas de la presente providencia y en su lugar se remitirá copia digital a los correos electrónicos institucionales y a los suministrados por los apoderados intervinientes en el trámite conciliatorio frente a la cual se presumirá su autenticidad.

CUARTO: La suma de dinero acordada por las partes generará intereses conforme a lo previsto por el artículo 192 del CPACA modificado por el artículo 62 de ley 2080 de 2021.

QUINTO: Esta conciliación hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

SEXTO: En firme esta providencia, archívese el expediente haciendo los registros respectivos en el sistema de gestión judicial siglo XXI.

SÉPTIMO: Este juzgado acatando el deber consagrado en el artículo 46 de ley 2080 de 2021 que modificó el artículo 186 del CPACA comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ Radicación memoriales:
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

- ✓ Ministerio Público – Procuraduría Judicial 57
Correo electrónico: procjudadm57@procuraduria.gov.co
mecaicedo@procuraduria.gov.co
- ✓ Radicación de procesos ordinarios:
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ Radicación de tutelas y habeas corpus: URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12
(2) 896-24-11

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
Juez

RIm

Firmado Por:

Paola Andrea Gartner Henao
Juez
Oral 001
Juzgado Administrativo
Valle Del Cauca - Cali

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

2d86d4f2be8b7174d7b8d8235c919576ad93e95cbf75bcf6f58efb635337baa4

Documento generado en 06/08/2021 11:12:06 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>